

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR

Señor Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 205771
Estados Unidos de América

17 de junio de 2019

Estimado señor Presidente Moreno

PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA GESTION FISCAL Y EL FOMENTO PRODUCTIVO

Por medio de la presente, manifiesto a usted el compromiso sostenido del Gobierno del Presidente Lenin Moreno Garcés de implementar medidas que devuelvan al Ecuador a una senda de crecimiento fiscalmente sostenible, revertiendo la inestabilidad macroeconómica y estableciendo los pilares de una economía moderna, anclada en la creación de empleo a través de la inversión privada, y que permite proteger a sus ciudadanos en situación de pobreza o alta vulnerabilidad. Nuestro Plan de Prosperidad 2018-2021, recientemente actualizado, representa nuestra estrategia de reforma económica de mediano plazo a través de cuatro principios fundamentales: (i) reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización; (ii) mejorar la competitividad, el crecimiento y el empleo; (iii) promover una prosperidad compartida y proteger a los pobres y vulnerables; y (iv) lograr estos resultados en un clima de transparencia y buen gobierno. El fortalecimiento de nuestro sistema de dolarización requerirá de manera fundamental restaurar la prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco institucional para el Banco Central; aumentar la solidez del sistema financiero, y apoyar la competitividad, el crecimiento, así como la creación de empleo.

Nuestro compromiso hacia el restablecimiento de la prudencia en la política fiscal está anclado en decididos esfuerzos en el fortalecimiento de nuestro marco de gestión macro-fiscal, en particular nuestro sistema de reglas fiscales; en mejoras sostenidas en la eficiencia del gasto público; y en el fortalecimiento de nuestra política y gestión tributaria. Para avanzar en estos compromisos, el Gobierno de Ecuador solicita al BID su acompañamiento y apoyo técnico y financiero a través de un Préstamo Basado en Políticas (PBL) en dos tramos, orientado a contribuir a la estabilidad fiscal de Ecuador, facilitando el crecimiento sostenible y el mantenimiento de los principales indicadores de desarrollo social. Esta Carta de Política expone el compromiso del Gobierno con los procesos de reforma de los componentes del Programa de Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y el Fomento Productivo, demostrando el alineamiento del programa con la estrategia de reforma del Gobierno.

El Gobierno de Ecuador está comprometido a generar, a través de sus reformas, un clima de estabilidad macroeconómica. Los esfuerzos de este Gobierno desde 2017 en restaurar la prudencia fiscal han permitido reducir el tamaño del SPNF del 44% del PIB en 2014 al 37% en 2018. Adicionalmente, hemos reducido el déficit primario no petrolero del SPNF, incluyendo subsidios a los combustibles, del 7.6% del PIB en 2016 al 5.3% del PIB en 2018. Nuestro gobierno aspira a reducir dicho déficit al 0.3% del PIB en 2021, y esperamos que esta consolidación fiscal permita reducir el monto de deuda hasta situarla por debajo del 40% del PIB en 2023, mientras se alcanza un nivel de reservas internacionales prudencial. Nuestra estrategia de reforma será reforzada por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF), que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de marzo de 2019 por una cantidad equivalente a SDR3.035 mil millones (435 por ciento de la cuota y el equivalente de US\$4.200 millones).

Fortalecimiento del Marco de Responsabilidad Fiscal y de la Transparencia de la Deuda

A finales de la pasada década, Ecuador introdujo dos reglas fiscales: (i) salvo en situaciones excepcionales para los gastos de salud, educación y justicia, los egresos permanentes del Estado solo podrían financiarse con ingresos permanentes; y (ii) el saldo total de la deuda pública no podría superar el 40% del PIB. Sin embargo, dicho régimen de reglas no ha sido eficaz ni a la hora de contener la evolución de la deuda pública, ni para el objeto de generar en tiempos de bonanza el espacio fiscal necesario para implementar políticas de estabilización macroeconómica con las que hacer frente a cambios en la posición cíclica de la economía. La regla fiscal que requiere que los ingresos permanentes superen los gastos permanentes no es coherente con la "regla de oro" constitucional que limita el financiamiento al gasto en inversión, y no responde a las mejores prácticas de control de crecimiento del gasto. La segunda regla fiscal, que define un límite a la ratio de deuda pública del 40% del PIB se encuentra sujeta a una excepción derivada de una disposición transitoria en la Ley de Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Con el objetivo de fortalecer nuestro marco de responsabilidad fiscal, el gobierno, mediante la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal de agosto de 2018 y su Reglamento asociado: i) ha establecido un límite de crecimiento del gasto público del gobierno central equivalente a la tasa de crecimiento real de largo plazo de la economía, definiendo además de cláusulas de escape a la aplicación de dicha regla y estableciendo mecanismos cuatrimestrales de monitoreo, incluyendo el análisis de riesgo de incumplimiento; y ii) ha fortalecido la transparencia en las estadísticas de deuda pública, mediante la inclusión en el cómputo de deuda pública de las obligaciones resultantes de la venta anticipada de petróleo, la deuda del gobierno central con otras entidades del Estado, y otras obligaciones (laudos arbitrales y deuda flotante entre otros), y asegurando la publicación mensual de las estadísticas de deuda pública incluyendo los estados agregados y consolidados de las distintas coberturas institucionales (Sector Público, Sector Público No Financiero, y Gobierno Central).

El gobierno se compromete asimismo a seguir fortaleciendo en el corto plazo este marco de responsabilidad fiscal mediante: i) la ampliación de la cobertura del límite de crecimiento de gasto del Gobierno Central (GC) al Sector Público No Financiero (SPNF); ii) la redefinición de la metodología de aplicación de la "regla de oro" (ingresos

sobre gastos permanentes) constitucional para que sea consistente con la nueva regla de crecimiento de gasto; y iii) la publicación de reportes cuatrimestrales de monitoreo y cumplimiento de la regla fiscal de crecimiento de gasto en 2019. El gobierno determinará asimismo la ampliación de la cobertura de la regla fiscal de Deuda Pública sobre el PIB, que se consolidará al nivel del SPNF y no del Sector Público Total; y asegurará la publicación mensual de los boletines de deuda de acuerdo con la nueva metodología de cálculo de deuda a nivel de SPNF en 2019.

Mejora en la Calidad y Eficiencia del Gasto Público

El carácter fuertemente expansivo de la política fiscal de la década anterior provocó un incremento considerable en el tamaño del SPNF que los esfuerzos de este Gobierno están ayudando a optimizar. Ecuador no cuenta con un sistema de evaluación de su calidad de gasto que permita enriquecer el proceso de formulación presupuestaria y guiar las prioridades de inversión del país. Todavía contamos con una muy escasa contribución del sector privado a los proyectos de infraestructura pública, área en la que el Gobierno está apoyando el desarrollo, con apoyo del Banco, de un programa de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada. De igual manera, el Estado enfrenta una alta carga fiscal derivada de la propiedad de empresas públicas (EE.PP.) poco eficientes, con debilidades en su estructura de gobernanza corporativa, sin un régimen fiscal comparable con el de sus pares en el sector privado, y con poco rigurosos requerimientos en transparencia financiera, los que se traduce en pocas EE.PP. con estados financieros auditados. Es esta un área en la que contamos igualmente con el apoyo decidido del Banco a través de apoyo técnico y de asistencia financiera.

Fortalecimiento Institucional. Con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de nuestro gasto público, el gobierno fortalecerá la dirección nacional de calidad del gasto en el MEF a través de su establecimiento como ente coordinador de las unidades de efectividad y calidad del gasto de la función ejecutiva, incluyendo: i) la obligatoriedad de las agencias del gobierno de reportar estadísticas de gasto al MEF; y ii) la definición de una agenda y metodologías de evaluación del gasto social, incluyendo evaluaciones ex ante y de impacto. En el corto plazo, el gobierno asegurará que reportes de información sobre gasto social de tres ministerios al menos (Educación, Salud e Inclusión Económica) hayan sido recibidos por el MEF, con el propósito de iniciar la evaluación piloto de al menos un programa de gasto social.

Asociaciones Público-Privadas. El gobierno está comprometido a mejorar la capacidad fiscal para la inversión pública a través del incremento de la contribución privada a proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. A tal efecto, el Gobierno enviará, para aprobación a la Asamblea Nacional (AN), reformas a la Ley de Incentivos a las APP que incluyan: i) mejoras al marco de coordinación interinstitucional del programa APP, incluyendo responsabilidades en la identificación, evaluación y gestión de riesgos fiscales derivadas de dichos proyectos; y las responsabilidades de los procesos de estructuración de éstos; ii) la definición de un marco normativo para la monetización de activos públicos; y iii) definición de procesos de gestión de iniciativas privadas no solicitadas. Adicionalmente, hemos reglamentado el tratamiento de pasivos contingentes derivados de proyectos bajo modalidad APP, y mejorado la regulación de los procesos de certificación plurianual de compromisos fiscales bajo dichos proyectos APP. Conscientes de la necesidad de extender los beneficios de esta modalidad a los niveles subnacionales de gobierno, el Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE) está creando una Unidad APP específica para gobiernos subnacionales. Se encuentra en ejecución además el primer plan de gestión de impacto ambiental a APP en el proyecto Puerto Posorja, cofinanciado por BID Invest.

En el corto plazo, el Gobierno aprobará el reglamento a la Ley de Incentivos a las APP, incluyendo i) el nuevo marco de coordinación institucional del programa; ii) la ejecución de iniciativas de monetización de activos de infraestructura; y iii) los procesos de gestión de iniciativas privadas no solicitadas. Durante 2019, esperamos tener la Unidad APP del Banco de Desarrollo de Ecuador en funcionamiento y tramitando solicitudes de estructuración de proyectos APP. El BDE remitirá asimismo al MEF, para su aprobación, la propuesta de creación del Fondo de Garantías para APP subnacionales, facilitando la bancabilidad privada de dichos proyectos de inversión pública y se continuará la implementación del Plan de Gestión Medioambiental del Proyecto Posorja mediante la remisión de sus informes trimestrales para aprobación. El gobierno agradece al BID el apoyo financiero prestado a través de la operación de préstamo EC-L1230 firmada en 2018 y la asistencia técnica recibida durante los últimos años para el desarrollo de nuestro programa de APPs.

Empresas Públicas. Sin incluir las EE.PP. adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Universidades del país (aproximadamente 400 en total), las EE.PP. de la función ejecutiva, 23 en total, representan una importante carga fiscal para el Estado. Dicha carga fiscal está motivada por una débil gobernanza corporativa del sistema de las Empresas Públicas (EE.PP.), que no cuentan con directorios profesionalizados, ni sistemas de evaluación del desempeño. Las EE.PP., tampoco están sujetas a un régimen fiscal equiparable al del sector privado, y que no provee de incentivos para la reinversión de parte de los excedentes en el crecimiento de la empresa. Tercero, las EE.PP. cuentan con inadecuados requerimientos de transparencia, al no publicar sus estados financieros auditados. De manera fundamental, la participación de mujeres en órganos de dirección es escasa. De los 66 puestos de directorio de las EE.PP., solo dos son ocupados por mujeres y únicamente debido a su nombramiento anterior como ministras del ramo asociado a la EE.PP.

Con el objetivo de fortalecer la gestión y control del Estado sobre las EE.PP. de la función ejecutiva, el Gobierno remitirá a la AN reformas a la Ley Orgánica de EE.PP. (LOEP), incluyendo: a) la reforma del rol de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (EMCO) para que sea una institución que vele por el rol propietario del estado y las buenas prácticas de gobierno corporativo; b) reformas a la composición y métodos de selección de los Directorios de las EE.PP., incrementando los requerimientos profesionales de selección de directores y eliminando la asignación de ministros del ramo como Presidentes de los directorios; c) reforma del régimen fiscal de EE.PP., alineándolo a las mejores prácticas internacionales, e incluyendo la definición de responsabilidades de pago de impuestos y política de distribución de excedentes basada en reglas claras y transparentes; d) reforma del proceso de licitación y ejecución de las auditorías externas de las EE.PP., asignando dicha autoridad a las mismas; y e) reforma estableciendo objetivos para la participación de mujeres en los consejos directivos de las EE.PP.. De manera adicional, el Gobierno ha mejorado el proceso de asignación de los Presupuestos Generales del Estado, incorporando todas las fuentes de ingresos de las EE.PP. a la formulación presupuestaria; definiendo la obligatoriedad de la presentación de la información de las EE.PP. en el sistema integrado de administración financiera del MEF previo a la consideración de la propuesta presupuestaria; y restringiendo el acceso a fuentes de financiamiento a solo a aquellas EE.PP. que demuestren capacidad de pago. En línea con el proceso de consolidación fiscal del Estado, hemos reducido la carga fiscal para el Estado derivada de las EE.PP., mediante la aprobación de planes de recorte del 10% de la masa salarial de las EE.PP. de la función ejecutiva por el MEF. Por último, y como parte esencial del proceso de optimización de la cartera de EE.PP. hemos iniciado el proceso de fusión de las

empresas petroleras del país, Petroamazonas y Petroecuador, contando con el apoyo financiero proporcionado por el BID.

En el corto plazo, seguiremos fortaleciendo la gestión y control del Estado sobre las EE.PP. a través del envío a Presidencia de un proyecto de reglamento a la LOEP que recoja las mejoras en aspectos de marco institucional, operativo y fiscal. De igual manera, el Gobierno aprobará regulación requiriendo la publicación de los estados financieros auditados de las EEPP. La preparación de los presupuestos del 2020 se hará de acuerdo con las reformas normativas definidas para el sector. El Estado seguirá reduciendo la carga fiscal derivada de las EE.PP., mediante la aprobación del proceso de liquidación de dos EE.PP. de sectores no estratégicos con carácter mercantil y la ejecución de los recortes de gasto de personal mencionados. Nuestro gobierno agradece el apoyo financiero en procesamiento y la asistencia técnica prestada por el BID en la reforma de nuestro sistema de EE.PP. El Gobierno sostendrá sus esfuerzos en la mejora de la eficiencia del sector de hidrocarburos con la contratación e inicio de actividades de diagnóstico para la fusión de las empresas petroleras.

Mejora en la Eficiencia y Transparencia de la Política y Gestión Tributaria

Ecuador todavía necesita incrementar el porcentaje del PIB que recauda a través de impuestos, que se situó en el 14,3% en 2018. A pesar de la demostrada profesionalidad de nuestro Servicio de Rentas Internas (SRI), todavía enfrentamos importantes desafíos para adecuar nuestra política y administración tributaria a los mejores estándares internacionales. Estamos haciendo esfuerzos para mejorar la integración de Ecuador en el sistema internacional tributario, ya que el país aún no realiza intercambios de información financiera con fines fiscales en el contexto del Foro Global de la OCDE, ni ha aprobado el conocimiento de último beneficiario de la propiedad. Enmarcado en la necesaria ampliación de nuestra base tributaria, Ecuador no ha desarrollado todavía la base tributaria de servicios digitales y la débil coordinación institucional entre nuestras agencias tributarias erosiona la base de nuestros principales tributos, IVA y Renta. Por último, aun mantenemos substanciales barreras burocráticas y técnicas que se reflejan en altos costes de cumplimiento tributario de nuestros contribuyentes.

Con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia de nuestra política y gestión tributaria, nuestro gobierno ha suscrito la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua (CAAM) del Foro Global de la OCDE, incluyendo el intercambio de información financiera con fines fiscales tanto a requerimiento (EOIR) como automático (AEIO) suscrita por el Estado y ha aprobado el conocimiento de último beneficiario de la propiedad según los estándares de transparencia del foro global de intercambio de transparencia tributaria. Hemos desarrollado una propuesta técnica para el establecimiento de un sistema de tributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito. El gobierno mejorará asimismo la gestión tributaria y aduanera con la preparación de un plan de acción para la integración de procesos de manejo de datos, control y fiscalización de los contribuyentes de SRI y SENAE, y ha fortalecido la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea para el contribuyente incluyendo: (i) tecnologías de entrega y recepción de información fiscal (formularios en línea) y sistema de pago en línea de obligaciones tributarias; (ii) proceso de inscripción en línea en el catastro tributario; y (iii) tecnologías que reduzcan los costes de gestión de cobro de deuda tributaria.

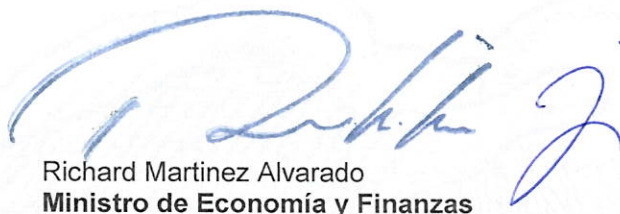
En el corto plazo, este gobierno implementará la CAAM, incluyendo la obtención de una evaluación final positiva del Foro Global (con resultado “compliant” o “largely compliant”); y asegurará que la CAAM es refrendada, incluyendo legislación de “Common Reporting Standards”. Implementaremos asimismo las provisiones legales de Conocimiento de Ultimo Beneficiario de la Propiedad. El Gobierno incluirá, en la propuesta de reforma tributaria, la propuesta de tributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito; e implementará las medidas de integración de procesos de las agencias tributarias de acuerdo con diagnóstico y hoja de ruta desarrolladas. Finalmente, seguiremos fortaleciendo la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea adicionales, incluyendo: (i) la inscripción de sociedades; (ii) la declaración de ganancias de capital y regalías mineras; y (iii) el pago en línea de la matriculación vehicular. Nuestro gobierno agradece el apoyo financiero en procesamiento y la asistencia técnica prestada por el BID para la mejora de nuestra administración tributaria.

Compromiso del Gobierno de Ecuador

Con esta carta, estoy solicitando el apoyo del BID para la ejecución del Plan de Prosperidad 2018-2021 y en particular los desafíos específicos que Ecuador enfrenta en la mejora de su gestión fiscal. A través de la modalidad de la Categoría de Préstamo Basado en Políticas (o PBL por sus siglas en inglés) en dos tramos, el gobierno solicita una operación de apoyo presupuestario de US\$300 millones, conscientes de que Ecuador cumple con los criterios de elegibilidad definidos para este instrumento. Adjunto algunas de las acciones de política en las que se concreta nuestro programa.

El Gobierno de Ecuador reitera por la presente su compromiso con el programa tal y como ha sido presentado y recibe con beneplácito el apoyo continuo del Banco con la operación de préstamo basado en políticas.

Atentamente,



Richard Martínez Alvarado
Ministro de Economía y Finanzas

Adj. Acciones de Política

Acciones de Política

Componente: Fortalecimiento del Marco de Responsabilidad Fiscal y de la Transparencia de la Deuda

- (a) Fortalecimiento del Marco de responsabilidad fiscal mediante: (i) un límite de crecimiento del gasto público del Gobierno Central (GC) equivalente a la tasa de crecimiento real de largo plazo de la economía; (ii) la definición de cláusulas de escape a la regla de crecimiento de gasto público, incluyendo escenarios de recesión económica grave; (iii) el establecimiento de mecanismos cuatrimestrales de monitoreo de la regla fiscal de crecimiento de gasto público incluyendo análisis de riesgo de incumplimiento.
- (b) Fortalecimiento de la transparencia en las estadísticas de deuda pública mediante: (i) la inclusión en el cómputo de deuda pública de las obligaciones resultantes de la venta anticipada de petróleo, la deuda pública del GC con otras entidades del Estado, y otras obligaciones (laudos arbitrales y deuda flotante entre otros); (ii) la publicación mensual de las estadísticas de deuda pública, incluyendo los estados agregados y consolidados de las distintas coberturas institucionales: Sector Público (SP), Sector Público no Financiero (SPNF) y del GC.
- (c) Fortalecimiento del marco de responsabilidad fiscal mediante: (i) la ampliación de la cobertura del límite de crecimiento del gasto público del GC al SPNF; (ii) redefinición de la metodología de aplicación de la “regla de oro” (ingresos sobre gastos permanentes) constitucional para que sea consistente con la nueva regla de crecimiento del gasto; (iii) publicación de reportes cuatrimestrales de monitoreo y cumplimiento de la regla fiscal de crecimiento del gasto en 2019.
- (d) Fortalecimiento de la transparencia en las estadísticas de la deuda pública, mediante: (i) la ampliación de la cobertura de la regla fiscal de deuda pública sobre el PIB, que se consolidará al nivel del SPNF y no del sector público total; y (ii) la publicación mensual de los boletines de deuda de acuerdo con la nueva metodología de cálculo de deuda a nivel de SPNF en 2019.

Componente: Mejora en la Calidad y Eficiencia del Gasto

- (a) Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Calidad del Gasto (DNCGP) en el MEF, a través del establecimiento del MEF como ente coordinador de las unidades de efectividad y calidad del gasto de la función ejecutiva del Estado, incluyendo: (i) la obligatoriedad de las agencias del GC de reportar estadísticas de gasto al MEF; (ii) definición de agenda y metodologías de evaluación del gasto social, incluyendo evaluaciones ex-ante y de impacto; (iii) reportes de información sobre gasto social de tres ministerios (Educación, Salud y de Inclusión Económica y Social) recibidos por el MEF; y (iv) evaluación piloto de al menos un programa de gasto social iniciada.
- (b) Mejora de la capacidad fiscal para la Inversión Pública (IP) con contribución privada, a través de: (i) envió a la Asamblea Nacional de

reformas a la Ley de Incentivos a las Asociaciones Público Privadas (APP) que incluyan: (aa) mejora del marco de coordinación interinstitucional del programa APP, incluyendo responsabilidades en la identificación, evaluación y gestión de riesgos fiscales derivadas de dichos proyectos; y las responsabilidades de los procesos de estructuración de éstos; (bb) definición de marco normativo para la monetización de activos públicos; y (cc) definición de procesos de gestión de iniciativas privadas no solicitadas; (ii) reglamentación del tratamiento de pasivos contingentes derivados de proyectos bajo modalidad APP, y la regulación de los procesos de certificación plurianual de compromisos fiscales bajo proyectos APP; (iii) creación de la Unidad APP para gobiernos subnacionales en el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE); y (iv) aprobación del primer plan de gestión de impacto ambiental de APP en el proyecto de Puerto Posorja.

- (c) Fortalecimiento de la gestión y control del Estado sobre las Empresas Públicas (EEPP) de la función ejecutiva a través de mejoras al marco institucional, operativo y fiscal, con el envío a la Asamblea Nacional de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, incorporando: (i) reforma del rol de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (EMCO) para que sea una institución que vele por el rol propietario del Estado y las buenas prácticas de gobierno corporativo; (ii) reformas a la composición y métodos de selección de los directorios de las EEPP, incrementando los requerimientos profesionales de selección de directores y eliminando la asignación de ministros del ramo como presidentes de los directorios; (iii) reforma del régimen fiscal de las EEPP alineándolo a las mejores prácticas internacionales, e incluyendo la definición de responsabilidades de pago de impuestos y política de distribución de excedentes basada en reglas claras y transparentes; (iv) reforma del proceso de licitación y ejecución de las auditorías externas de las EEPP, asignando dicha autoridad a las mismas; y (v) reforma estableciendo objetivos para la participación de mujeres en los consejos directivos de las EEPP.
- (d) Reformas al proceso de asignación de recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) a las EEPP, incluyendo: (i) incorporación de todas las fuentes de ingresos de las EEPP a la formulación presupuestaria; (ii) obligatoriedad de la presentación de la información de las EEPP en el sistema integrado de administración financiera del MEF previo a la consideración de la propuesta presupuestaria; y (iii) restricción de acceso a fuentes de financiamiento a solo aquellas EEPP que demuestren capacidad de pago.
- (e) Reducción de la carga fiscal para el Estado derivada de la gestión de EEPP, mediante la decisión de recorte del 10% de la masa salarial de las EEPP de la función ejecutiva por el MEF.
- (f) Mejora de la eficiencia del sector hidrocarburos mediante el proceso de fusión de las EEPP Petroecuador y Petroamazonas iniciado con la delegación de la responsabilidad de liderar la fusión al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

- (g) Mejora de la capacidad fiscal para la IP con contribución privada, a través de: (i) aprobación del reglamento de la Ley de Incentivos a las APP, incluyendo la reglamentación de: (aa) el nuevo marco de coordinación institucional del programa; (bb) la ejecución de iniciativas de monetización de activos de infraestructura; y (cc) los procesos de gestión de iniciativas privadas no solicitadas; (ii) propuesta de creación del Fondo de Garantías para APP subnacionales, facilitando la bancabilidad privada de dichos proyectos de inversión pública, remitida al MEF para aprobación; (iii) la Unidad APP del BDE en funcionamiento y tramitando solicitudes de estructuración de proyectos APP; y (iv) elaboración de informes trimestrales de implementación del Plan de Gestión Medioambiental del Proyecto Posorja.
- (h) Fortalecimiento de la gestión y control del Estado sobre las EEPP de la función ejecutiva a través de mejoras al marco institucional, operativo y fiscal, incluyendo el envío a Presidencia del proyecto de reglamento de la LOEP, y la aprobación de regulación requiriendo la publicación de los estados financieros auditados de las EEPP empezando con el año fiscal 2019.
- (i) Reformas al proceso de asignación de recursos del PGE a las EEPP, incluyendo la preparación de los presupuestos institucionales de las EEPP en 2020 de acuerdo las reformas normativas efectuadas.
- (j) Reducción de la carga fiscal para el Estado derivada de la gestión de EEPP, mediante: (i) la implementación de un recorte del 10% a la masa salarial de las EEPP de la función ejecutiva; y (ii) la aprobación del proceso de liquidación de dos EEPP de sectores no estratégicos con carácter mercantil.
- (k) Inicio del proceso de fusión de las empresas Petroamazonas y Petroecuador a fin de mejorar la eficiencia del sector hidrocarburos.

Componente: Mejora de la eficiencia y transparencia de la política y gestión tributaria.

- (a) Suscripción de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua (CAAM) del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo intercambio de información financiera con fines fiscales tanto a requerimiento (EOIR) como automático (AEIO).
- (b) Aprobación de la Declaración sobre Aplicación del Conocimiento del Ultimo Beneficiario de la Propiedad según los estándares de transparencia del Foro Global de Intercambio de Transparencia Tributaria.
- (c) Preparación de propuesta técnica de sistema de tributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito.

- (d) Mejora de la gestión de la administración tributaria y aduanera, con la presentación de un plan de acción para la integración de procesos de manejo de datos, control y fiscalización de los contribuyentes.
- (e) Fortalecimiento de la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea incluyendo: (i) tecnologías de entrega y recepción de información fiscal (formularios en línea) y sistema de pago en línea de obligaciones tributarias; (ii) proceso de inscripción en línea en el catastro tributario; y (iii) tecnologías que reduzcan los costes de gestión de cobro de deuda tributaria.
- (f) Implementación de la CAAM, incluyendo: (i) refrendo de la CAAM, incluyendo legislación de “Common Reporting Standards”; y (ii) evaluación final positiva del Foro Global (con resultado “compliant” o “largely compliant”).
- (g) Implementación de provisiones legales de Conocimiento de Último Beneficiario de la Propiedad.
- (h) Incorporación de la propuesta técnica de sistema de tributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito en la propuesta de reforma tributaria.
- (i) Implementación de medidas de integración de procesos de las agencias tributarias de acuerdo con diagnóstico y hoja de ruta.

Fortalecimiento de la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea para: (i) la inscripción de sociedades; (ii) la declaración de ganancias de capital y regalías mineras; (iii) el pago en línea de la matriculación vehicular.